

SENTENCIA DEFINITIVA

HERMOSILLO, SONORA, A DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

V I S T O S para resolver en definitiva los autos originales del expediente número ■■■■■■■■■■ relativo al **JUICIO ORAL MERCANTIL**, promovido por ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ en contra de ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■; y

RESULTANDOS:

1.- Que por escrito presentado el día ■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, que se remitió el día ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■ a este Juzgado Primero Oral Mercantil, compareció ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ demandando en la VÍA ORAL MERCANTIL y en ejercicio de la acción de cumplimiento forzoso de contrato, así como la de responsabilidad civil en su modalidad de daño moral y daños punitivos, a ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■, las siguientes prestaciones:

*“A. El pago de un total de ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ que deviene del incumplimiento que emana de la cobertura de **"INFARTO Y CÁNCER EN MUJERES"** de la póliza no. ■■■■■■■■■■.*

*B. El pago de los **intereses** devengados y que se sigan devengando a razón de lo establecido en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de seguros y Fianzas -en adelante LISF-, crédito que empezó a generarse 30 días después de que la aseguradora recibió la reclamación de conformidad con el artículo 71 de la Ley Sobre el Contrato del Seguro -en adelante LSCS-.*

*C. El pago del **daño moral** que implica la presente demanda derivada del incumplimiento de la aseguradora, mismo que según el artículo 2087 de la legislación local señala que será a criterio de este Juzgador.*

*D. El pago de **daños punitivos** derivado del incumplimiento del pago por las cuestiones que precisare a lo largo de esta semana.*

*E. El pago de los **gastos y costas**, que la tramitación de este juicio origine.”*

La actora sustentó su demanda en la relación de hechos y

preceptos de derecho que señaló en su escrito inicial, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado por economía procesal.

2.- Cumplida la prevención impuesta, por auto de fecha ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, se admitió la demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose emplazar a las demandadas, lo cual tuvo verificativo mediante diligencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, y por cuya eficacia procesal comparecieron por conducto de su representante contestando la demanda entablada en su contra, las que fueron admitidas por auto dictado el ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■, con vista a la parte contraria.

3.- Posteriormente, en auto de fecha ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■, se tuvo a la actora por contestada la delatada vista, y al ser el momento procesal oportuno, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia preliminar.

4.- El ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, tuvo verificativo la audiencia preliminar, en la que se hizo constar que compareció el representante de las demandadas, así como la inasistencia de la actora.

Audiencia en la cual se depuró el procedimiento, se declaró acreditada la legitimación procesal de los contendientes, haciéndose constar que no lograron conciliar, ni mediar, así como tampoco se determinaron acuerdos sobre hechos no controvertidos, ni probatorios.

A su vez, se admitieron las siguientes pruebas ofrecidas por la actora:

1) Confesional a cargo de las demandadas ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, por conducto de quienes acreditaran tener facultades para tales efectos.

2) Ratificación de contenido y firma a cargo de las demandadas ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, por conducto de quienes acreditaran tener facultades para tal efecto, respecto de los siguientes documentos, mismos que salvedad del primero, también se le admitieron como pruebas de su parte:

- Escrito de contestación de demanda.
- Copia simple de Solicitud Seguro de Vida Individual.
- Copia simple de Formato para solicitar Domiciliación de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete.
- Copia simple de póliza número ■■■■■■■■.
- Copia simple de dos escritos de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, con el membrete de “■■■■ ■■■■■■”.
- Copia simple de documento denominado ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, que al reverso contiene guía de siniestro ■■■■■ ■■■■■■■■.
- Escrito de fecha ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■.
- Informe con sello de recibido el ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■, por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
- Acta de Audiencia de Conciliación con firmas autógrafas, levantada el ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■ en el expediente ■■■■■■■■■■■■, del índice de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

3) Documentales privadas consistentes en:

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ de fecha ■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■, suscrito por el Doctor ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■.
- Resumen clínico y diagnóstico definitivo de la paciente ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, de fecha ■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■, suscrito por el Doctor ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■
- Impresión de escrito de fecha ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■, emitido por ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■

4) Ratificaciones de contenido y firma a cargo del Doctor ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■, respecto del Reporte Histopatológico de fecha ■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■; así como a cargo del Doctor ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ respecto del Resumen clínico y diagnóstico definitivo, de fecha ■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■■■.

5) Documentales públicas consistentes en

-Oficio ■■■■■■■■■■■■, de fecha ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■, correspondiente al expediente ■■■■■■■■■■■■, del
índice de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el cual contiene anexo
Dictamen de Valoración Técnica y Jurídica con firma autógrafa, emitido el
■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■, por la Directora de
Dictaminación de dicha Comisión.

-Cinco cédulas profesionales.

6) Pericial médica a cargo del Doctor ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■■■.

7) Presuncional.

8) Instrumental de actuaciones.

A la demandada ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ le fueron
admitidas las siguientes probanzas:

1) Documentales públicas consistentes en:

-Copia certificada de Escritura Pública número ■■■■■■■■, otorgada
ante la fe del notario público número ■■■■ con ejercicio en ■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, actualmente Ciudad de México.

-Copia certificada de Escritura Pública número ■■■■■■, otorgada
ante la fe del notario público número ■■■■, con ejercicio en ■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, actualmente Ciudad de México.

-Impresión de Cédula de Identificación Fiscal.

2) Documentales privadas consistente en

-Copia simple de Solicitud Seguro de Vida Individual, exhibida por
la actora.

-Copia simple de póliza número ■■■■■■■■■■, exhibida por la actora.

-Acuse de recibido el ■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■
■■■■■■■■■■, por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), de escrito suscrito
por el representante de ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■

3) Ratificación de contenido y firma a cargo de la actora, respecto
del escrito inicial de demanda.

4) Confesional a cargo de la actora.

Y a la diversa demandada ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■, le fueron admitidas las documentales públicas consistentes en copia certificada de Escritura Pública número ■■■■■■■■ otorgada ante la fe del notario público número ■■■■, con ejercicio en México, Distrito Federal, actualmente Ciudad de México; e impresión de Cédula de Identificación Fiscal.

5.- Seguidamente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de juicio y dictado de sentencia, la que tuvo verificativo el veintiocho de junio del presente año, en la cual se declararon desahogadas por su propia naturaleza las pruebas documentales, admitidas a las contendientes, así como la presuncional e instrumental de actuaciones admitidas a la actora; así también ante el incumplimiento de la demandada ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ se tuvieron por ciertos los hechos que la actora pretendía acreditar con las documentales precisadas bajo los números del 1 al 7, del apartado Petición Especial, del escrito inicial de demanda; se desahogaron las confesionales y ratificaciones de contenido y firma a cargo de las demandadas, por conducto de su representante, así como la pericial médica; y en lo que hace a las pruebas admitidas a la aseguradora demandada, se desahogaron la confesional y ratificación de contenido y firma a cargo de la actora.

6.- Transcurrida la etapa de alegatos, se declaró visto el presente asunto, difiriéndose la audiencia de juicio, virtud de encontrarse pendientes de desahogo las ratificaciones de contenido y firma, admitidas a la actora a cargo de los doctores ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■.

7.- Por auto de ■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, se señaló fecha para la reanudación de la audiencia de juicio, lo cual tuvo verificativo el ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■, procediéndose a emitir el fallo correspondiente, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se reformó el artículo 1390 Bis 38 del Código de Comercio, a fin de exponer oralmente y de forma breve, los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la presente sentencia y, en su caso, dar lectura a los puntos resolutivos, la cual a continuación se

dicta al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S:

I.- Esta Juzgadora es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 1090, 1091, 1092, 1094 y 1104 fracción II del Código de Comercio, en relación con el diverso artículo 1390 Bis del Título Especial del Juicio Oral Mercantil del ordenamiento legal invocado y al Acuerdo General número 01/2013 del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, relativo a la creación de este Juzgado Oral Mercantil, a la declaratoria del inicio de su vigencia así como a su competencia, jurisdicción territorial y fecha de inicio de funciones, tomando en cuenta que el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de los asuntos mercantiles, cuando se actualice el supuesto previsto en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- La vía Oral Mercantil elegida por la actora para el trámite del presente juicio, es la adecuada de conformidad con el artículo 1390 bis 1 del Código de Comercio, el cual establece que no se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial previstos en la misma legislación y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada, y acorde al Transitorio Segundo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, a través del cual se reformó la señalada legislación mercantil, y estableció que a partir del veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se tramitarían en la citada vía todas las contiendas mercantiles cuyo monto fuera hasta \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

III.- Al desahogarse la audiencia preliminar prevista en el artículo 1390 Bis 32 fracción I del Código de Comercio, se declaró la legitimación procesal de los contendientes, determinando que pudieron constituirse como partes en el proceso, en términos de los artículos 1056 del Código de Comercio y 1 párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos

Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, al determinarse que la accionante ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ se legitimó en el proceso al ser persona física, mayor de edad, que compareció por su propio derecho, sin que se desprendiera del proceso que careciera del ejercicio de sus derechos civiles.

Así también se legitimaron en el proceso, ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■, al comparecer ambas por conducto de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ personalidades que acreditó con copias certificadas de las Escrituras Públicas números ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, otorgadas ante la fe de los notarios públicos números ■■ ■■■■, y la número ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, otorgada ante la fe del notario público número ■■■■, con ejercicio en México, Distrito Federal, actualmente Ciudad de México; documentales a las que en la propia audiencia preliminar se les confirió pleno valor probatorio, en términos del artículo 1292 del Código de Comercio.

En la causa se legitimaron tanto la actora ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, como la diversa demandada ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ porque la acción se ejercitó por la persona a quien la ley concede facultad para ello, y frente a la persona moral contra quien debió de ser ejercitada, en términos del artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, lo que se concluye con la póliza de seguro número ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ exhibida como base de la acción, al aparecer emitida por dicha demandada, y como asegurada la hoy actora.

Habiendo por su parte ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, opuesto al respecto la excepción que denominó ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■, en la que señaló que no se encuentra constituida como una empresa de seguros, ni se dedica a la venta de seguros, constituyendo una institución bancaria cuyas operaciones se encuentran reguladas por el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que al no estar facultado para celebrar contratos de seguros, es evidente su falta de legitimación en la causa.

Excepción que deviene procedente, toda vez que además que la actora no explicó los motivos por los cuáles demandó a ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, de la póliza de seguro exhibida como base de la acción, no se advierte que dicha institución bancaria guarde relación alguna con las prestaciones reclamadas, desde el momento que el citado documento se advierte emitido por ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■, persona moral distinta a aquella.

De ahí que se declara su falta de legitimación pasiva, y en lo subsiguiente, no se le considerará al efectuarse el análisis de los restantes presupuestos procesales, los elementos de la acción ejercitada, las excepciones opuestas por su parte, y las diversas probanzas que al efecto ofreció.

IV.- La relación jurídico procesal se integró debidamente, al emplazarse a juicio a la demandada ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ con las formalidades que prevén los artículos 1390 Bis 14 y 1390 Bis 15 del Código de Comercio.

V.- Las partes gozaron de la igualdad y oportunidad probatoria que les concede el artículo 1390 Bis 13 del Código de Comercio, por lo que estuvieron en aptitud de ofrecer los medios de convicción que consideraron pertinentes e idóneos al caso que se resuelve.

VI.- El debate en el presente juicio, se fijó con los ocursos de demanda y contestación a la misma, en términos de los artículos 1390 Bis 8 y 1390 Bis 16 del Código de Comercio, y 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

VII.- Con independencia de las excepciones opuestas por la demandada, es obligación de esta Juzgadora analizar de manera oficiosa los elementos que constituyen la acción planteada en esta vía, para determinar si se actualiza o no el derecho subjetivo privado invocado por la accionante.

En ese sentido, se encuentra emitida la Tesis de Jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página once del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

“ACCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.- La improcedencia de la acción, por falta de uno de los requisitos esenciales,

puede ser estimada por el Juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.”

De conformidad con los artículos 1390 Bis 8 y 1194 del Código de Comercio, es carga de las partes demostrar en forma fehaciente sus pretensiones, por lo que en inicio, se analizará la acción de cumplimiento forzoso de contrato de seguro ejercitada, respecto a la cual la actora debió demostrar:

- A) La existencia de la Póliza de Seguro de Vida Individual número ■■■■■■■■, emitida por ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, a través de la cual se aseguró a ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■;
- B) La actualización de la cobertura “Infarto y Cáncer en Mujeres”, amparada por la póliza durante su vigencia; y
- C) El incumplimiento por parte de la aseguradora demandada de sus obligaciones derivadas del referido contrato.

En lo que hace al primer elemento de la enunciada acción, la actora señaló en su escrito inicial, que el ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■, la demandada emitió la Póliza de Seguro de Vida Individual número ■■■■■■■■■■, en la que se advierte como asegurada y contratante, cuya vigencia inició en la misma fecha de su emisión, concluyendo cinco años después; y amparando entre otras, la cobertura “Infarto y Cáncer en Mujeres”, con una suma asegurada de ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■; hechos que fueron aceptados por la demandada al producir contestación, y al ser ratificado dicho escrito en su contenido y firma por su representante, constituye confesión perfecta en su contra en términos de los artículos 1235 y 1287 del Código de Comercio.

Ello con independencia que ante el incumplimiento de la demandada de exhibir el original de la delatada póliza, en la audiencia de juicio se tuvieron por ciertos los hechos que la actora pretendía acreditar con dicho medio de convicción, que consistieron en lo que interesa, en su existencia.

Además, la actora exhibió copia simple de la aludida póliza, misma que fue ratificada en su contenido en la audiencia de juicio por el representante de la demandada, por lo que se le confiere pleno valor

En lo que respecta al segundo elemento de la acción ejercitada, en el hecho “5” del escrito inicial, la actora señaló que el ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■, le fue diagnosticado cáncer cervical invasor etapa IB1, actualizando la cobertura “Infarto y Cáncer en Mujeres” amparada por la póliza basal, durante su vigencia.

10

biopsia dirigida reporta cáncer microinvasor o invasor, la paciente se transferirá a un Servicio o Centro Oncológico para su tratamiento correspondiente.”

Diagnóstico que fue corroborado con la pericial médica a cargo del Doctor ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■, a la que se le confiere pleno valor probatorio en términos del artículo 1301 del Código de Comercio, toda vez que en inicio, efectuó una explicación respecto a la enfermedad de cáncer cérvico uterino, sus etapas y características, y posteriormente en relación a la actora, precisó que el diagnóstico de la paciente ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ se estableció ante la evidencia de una prueba de Papanicolau anormal, efectuándole un estudio colposcópico que consiste en la visualización del cuello uterino mediante el auxilio de un microscopio de bajo aumento llamado colposcopio, estudio en el que se tomó una biopsia cervical que fue enviada al patólogo para su análisis, en cuyo estudio histopatológico diagnosticó “Carcinoma moderadamente diferenciado invasor, tipo adenoescamoso con mitosis típicas y atípicas; así también, señaló que ante dicho reporte de cáncer invasor, y después de efectuar una maniobra clínica descrita como tacto recto-vaginal, permitió establecer que la lesión estaba circunscrita al cuello uterino, dado que las estructuras anatómicas vecinas como los tabiques, fondos de sacos vaginales, como los parametrios, se encontraban libres de lesión tumoral, lo que le permitió concluir el diagnóstico clínico de “Carcinoma Cervicouterino Invasor en etapa IB1; precisando en el punto J, que el Papanicolau anormal, la colposcopia, y la toma de biopsia cervical, constituyen los medios más valiosos para descubrir los cánceres cervicouterinos. Además, en la audiencia de juicio al exponer sus conclusiones, explicó que cuando la enfermedad avanza del epitelio que es la superficie de la piel, traspasando o rompiendo la membrana basal, penetrando al estroma que es un tejido más profundo, a la enfermedad se le empieza a considerar como invasor, y que cuando su profundidad es menor a cinco milímetros se clasifica como 1A, y cuando es mayor a esa medida se clasifica como 1B, y que la etapa 1B1, es aquella en la que la enfermedad están limitada al cuello de la matriz, y significa que el tamaño del tumor es menor a cuatro centímetros. Advirtiéndose así, una debida

fundamentación y motivación, además de congruente en sus conclusiones.

En consecuencia, al haber quedado demostrado que el ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, se le diagnosticó a la hoy actora la enfermedad de cáncer, se actualizó la cobertura “Infarto y Cáncer en Mujeres”, amparada por la póliza de seguro base de la acción, siniestro que se actualizó durante su vigencia, que como quedó demostrado fue del ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, para terminar cinco años después, el ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ por lo que se declara demostrado el segundo elemento de la acción.

En lo que respecta al tercer elemento de la acción, señaló la actora en los hechos “6” y “8” del escrito inicial, que el ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, realizó la correspondiente reclamación a la hoy demandada, quien el ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■, rechazó la procedencia del reclamo; hechos que no solo aceptó al producir contestación, sino que quedó perfeccionada tal aceptación, con la ratificación del citado escrito, lo que constituye confesión perfecta en su contra, en términos de los artículos 1235 y 1289 del Código de Comercio.

Asimismo, la actora exhibió impresión de escrito de fecha ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, la que no obstante que fue objetada por la demandada, fue reconocida en su existencia y contenido por su representante, por lo que se le confiere pleno valor probatorio en términos de los artículo 1241 y 1296 del Código de Comercio, al advertirse de su contenido precisamente, el rechazo por parte de la aseguradora de efectuar el pago respecto a la cobertura de cáncer en la mujer.

Igualmente, la actora ofreció y le fueron admitidos como pruebas:

-Informe con sello de recibido el ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

-Acta de Audiencia de Conciliación con firmas autógrafas, levantada el ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, en el expediente ■■■■■■■■■■■■■■■■, del índice de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, a página 2667, que a la letra dice:

“SEGUROS. EL BENEFICIARIO, POR REGLA GENERAL, DEBE ACREDITAR LA EXISTENCIA DEL CONTRATO, QUE OCURRIÓ EL SINIESTRO AMPARADO POR LA PÓLIZA Y QUE DIO AVISO OPORTUNO A LA ASEGURADORA; DE MANERA QUE SI ÉSTA ADUCE QUE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO INDEMNIZÓ ESTÁN JUSTIFICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, LE CORRESPONDE EXHIBIRLAS. Al resolver la contradicción de tesis 233/2011, la Primera Sala del Alto Tribunal, emitió la jurisprudencia 1a./J. 7/2011 (10a.) de rubro: "SEGUROS. SI AL CONTESTAR LA RECLAMACIÓN DE PAGO O DURANTE UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, LA ASEGURADORA NO EXPONE TODAS LAS RAZONES POR LAS QUE NIEGA LA PRETENSIÓN DEL ASEGURADO, NO SE VE LIMITADO SU DERECHO DE DEFENSA EN EL JUICIO, NI EXIME DE LA CARGA DE LA PRUEBA A ESTE ÚLTIMO; PERO SÍ LE IMPONE LA CARGA DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN A FAVOR DEL ASEGURADO SOBRE CUESTIONES QUE NO SE ENCUENTREN CLARAMENTE ESTABLECIDAS EN LA PÓLIZA.”; en cuya ejecutoria reiteró el criterio en que consideró que el artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros contiene el principio de información que rige las actividades y operaciones de dichas instituciones, en protección de los intereses del público usuario de sus servicios, que les impone la obligación de informar en forma clara y precisa todo lo relativo a sus productos y los contratos de seguro que celebren, incluyendo los derechos y obligaciones de las partes. Que de conformidad con dicho precepto, cuando la aseguradora recibe una reclamación, debe informar con precisión si procede o no el pago de la suma asegurada, y las razones por las cuales no proceda, en su caso, haciendo referencia específica a las condiciones, exclusiones, limitaciones, pagos de deducibles y cualquier otra modalidad que sea aplicable en los términos de la póliza y las condiciones generales del seguro; y que, si se reclama el pago del seguro por haber ocurrido el siniestro, la carga de la prueba del asegurado, contratante, o beneficiario de la póliza se reduce a acreditar: a) la existencia del contrato de seguro; b) la materialización del riesgo amparado por la póliza; y, c) que dio aviso oportuno a la aseguradora; en este sentido, si la aseguradora aduce que las causas por las que no pagó por el siniestro están justificadas en las condiciones generales del contrato de seguro, de conformidad con el artículo 1194 del Código de Comercio y los artículos 20, 23 y 24 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, corresponde a la aseguradora exhibir dichas condiciones generales, pues la negativa del pago por actualizarse algún supuesto previsto en las condiciones generales del contrato de seguro, como las omisiones o falsas declaraciones del asegurado en la contratación, ello constituye el sustento de su excepción y, por tanto, es su carga exhibir dichas condiciones generales.”

Precisándose a su vez, que la actora también ofreció y le fueron admitidas las siguientes pruebas:

-Copia simple de Solicitud Seguro de Vida Individual.

-Copia simple de Formato para solicitar Domiciliación de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete.

-Copia simple de dos escritos de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, con el membrete de ■■■■■ ■■■■■■■■■■.

-Copia simple de documento denominado “INFORMACIÓN IMPORTANTE”, que al reverso contiene guía de siniestro “Vida Individual”.

-Impresión de escrito de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitido por ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■.

Instrumentales en relación a las que se determina su ausencia de valor probatorio, en términos del artículo 1306 del Código de Comercio, pues aun cuando salvedad de la última, fueron ratificadas por el representante de la demandada, no aportan elementos tendientes a acreditar la acción en estudio, toda vez que la primera en mención, carece de firma de la hoy actora; el formato de domiciliación, contiene autorización de la actora para cargar a su cuenta el importe de la prima, lo que no constituyó un hecho controvertido; los escritos de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, lo que evidencian es que la demandada solicitó a la actora información y documentación relativa al siniestro, y que le notificó la designación de la persona que investigaría la reclamación; el documento denominado “INFORMACIÓN IMPORTANTE”, carece del registro correspondiente ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por lo que la misma no obliga a la demandada; y el escrito de fecha ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■■■, constituye una copia simple que no fue perfeccionado con diverso medio de prueba, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil.

Asimismo, la actora ofreció la presuncional e instrumental de actuaciones, advirtiéndose del sumario elementos a su favor en términos de los artículos 1306 del Código de Comercio y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, toda vez que el representante de la demandada al producir contestación, aceptó la existencia de la póliza basal, así como que rechazó el pago de la indemnización reclamada.

Por otra parte, la demandada bajo el numero I, opuso la diversa excepción que denominó “*FALTA DE ACCIÓN*”, haciéndola consistir en la negación genérica de los hechos de la demanda y la no aplicabilidad del derecho invocado por la actora, recayendo en ella la carga de la prueba de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la acción.

Defensa en estudio que se declara parcialmente infundada, virtud que como se precisó en párrafos precedentes, en el caso, la actora sí demostró la acción de cumplimiento forzoso de contrato, en cumplimiento a la carga procesal impuesta por el artículo 1194 del Código de Comercio, por lo que a la demanda le correspondía demostrar sus excepciones.

Invocándose al efecto la Tesis de Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 54, Junio de mil novecientos noventa y dos, a página 62, que es del tenor siguiente:

“SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de acción o sine actione agis, no constituye propiamente hablando una excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer el demandado, para retardar el curso de la acción o para destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, no entra dentro de esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico, solamente puede consistir en el que generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al actor, y el de obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la acción.”

Asimismo, bajo el número III, la demandada opuso la diversa excepción de “*IMPROCEDENCIA AL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS*”, en la que señaló que la acción ejercitada no le otorga ese derecho, porque no se trata de obligaciones de plazo cumplido y mucho menos que sean exigibles, estando sujeta la acción a la determinación en sentencia de su procedencia.

Excepción que deviene infundada, toda vez que en términos del artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, el derecho al pago de intereses moratorios, se genera desde el momento en que la institución de seguros incumple con sus obligaciones en los plazos convenidos, precepto legal que establece:

“Artículo 276.- Si una Institución de Seguros no cumple con las obligaciones asumidas en el contrato de seguro dentro de los plazos con que cuente legalmente para su cumplimiento, deberá pagar al acreedor una indemnización por mora de acuerdo con lo siguiente:

I. Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en Unidades de Inversión, al valor de éstas en la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y su pago se hará en moneda nacional, al valor que las Unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo.

Además, la Institución de Seguros pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en Unidades de Inversión conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el cual se capitalizará mensualmente y cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en Unidades de Inversión de las instituciones de banca múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;

...

IV. Los intereses moratorios a que se refiere este artículo se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos en la parte inicial de este artículo y hasta el día en que se efectúe el pago previsto en el párrafo segundo de la fracción VIII de este artículo. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en que persista el incumplimiento...”

Por lo que al haber quedado demostrados los elementos de la acción de cumplimiento forzoso de contrato, y que la demandada conoció del siniestro el ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■, en términos del artículo 71 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, que establece “El crédito que resulte del contrato de seguro vencerá treinta días después de la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación.”; el plazo para que la demandada cumpliera con el pago de la indemnización reclamada, feneció el ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■, por lo que a partir del día siguiente se constituyó en mora, circunstancia que habrá de considerarse al momento de resolver la prestación cuestionada.

A su vez, la demandada bajo el número IV, opuso la excepción que denominó “IMPROCEDENCIA AL PAGO DE LOS DAÑOS PUNITIVOS Y DAÑO MORAL”, en la que delató que la actora no fundamenta ni motiva tales pretensiones, además que no incurrió en responsabilidad, ni fue la causa directa del rechazo, así como tampoco fue el motivo de una exposición de la vida íntima de la hoy actora, y no existe ningún elemento

de cuantificación para los mismos y mucho menos están justificados cuantitativamente.

Estableciendo respecto al daño moral, el artículo 1916 del Código Civil Federal, que:

“Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos ellos del presente Código.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.

Estarán sujetos a la reparación del daño moral de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento y, por lo tanto, las conductas descritas se considerarán como hechos ilícitos:

- I. El que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien;*
- II. El que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa;*
- III. El que presente denuncias o querellas calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que su autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquél no se ha cometido, y*
- IV. Al que ofenda el honor, ataque la vida privada o la imagen propia de una persona.*

La reparación del daño moral con relación al párrafo e incisos anteriores deberá contener la obligación de la rectificación o respuesta de la información difundida en el mismo medio donde fue publicada y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia a que fue dirigida la información original, esto sin menoscabo de lo establecido en el párrafo quinto del presente artículo.

La reproducción fiel de información no da lugar al daño moral, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona, pues no constituye una responsabilidad para el que difunde dicha información, siempre y cuando se cite la fuente de donde se obtuvo”.

Ahora bien, lo que se advierte del sumario, es que la actora al efecto señaló que el exponer su vida íntima al personal de la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el proceder judicialmente exponiendo su vida íntima al personal de este juzgado, y al del juzgado de Ciudad Obregón, Sonora, y el tener que comentar a sus seres queridos la interposición de la demanda, le causó un daño moral; sin embargo, conforme a los citados preceptos legales, para la procedencia a la prestación reclamada por concepto de daño moral, la actora debió demostrar que derivado a las circunstancias que refiere, sufrió alguna lesión en sus valores espirituales, como el honor, sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, y en su defecto, si se vulneró o menoscabó ilegítimamente su libertad o su integridad física o psíquica; sin que por un lado del desahogo de la confesional admitida a cargo de la demandada, se desprendiera formulada interrogante alguna en tal sentido, por lo que carece de valor probatorio en términos del artículo 1306 del Código de Comercio. Y sin que así tampoco de los diversos documentos que exhibió, de las ratificaciones que se desahogaron y de la presuncional e instrumental de actuaciones, se advirtiera elemento para tal fin, conforme al mismo precepto legal; y sin que así tampoco se advierta de la póliza basal, contratada la cobertura de daño moral o responsabilidad civil, dentro de la cual se contemple aquélla, por lo que cobra relevancia lo dispuesto por el ya transcrito artículo 78 del Código de Comercio.

Y en lo que hace a la prestación reclamada por concepto de daños punitivos, se estima pertinente precisar que la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, desarrolló su criterio sobre los “daños punitivos” en los juicios de amparo directos 30/2013 y 31/2013, en los cuales sostuvo lo siguiente:

“Mediante la compensación se alcanzan objetivos fundamentales en materia de retribución social. En primer lugar, al imponer a la responsable la obligación de pagar una indemnización, la víctima obtiene la satisfacción de ver sus deseos de justicia cumplidos. Así, mediante la compensación la víctima puede constatar que los daños que le fueron ocasionados también tienen consecuencias adversas para el responsable.

Por otra parte, la compensación tiene un efecto disuasivo de las conductas dañosas lo que prevendrá conductas ilícitas futuras. Dicha medida cumple una doble función: ya que las personas evitarán causar daños para evitar tener que pagar una indemnización, por otra parte, resultará conveniente desde un punto de vista económico sufragar todos los gastos necesarios para que evitar causar daños a otras personas.

A dicha faceta del derecho de daños se le conoce en la doctrina como “daños punitivos” y se inscribe dentro del derecho a una “justa indemnización”. En efecto, mediante la compensación el derecho desaprueba a las personas que actúan ilícitamente y premia a aquellas que cumplen la ley. De esta forma se refuerza la convicción de las víctimas en que el sistema legal es justo y que fue útil su decisión de actuar legalmente. Es decir, la compensación es una expresión social de desaprobación hacia el ilícito y si esa punición no es dada, el reconocimiento de tal desaprobación prácticamente desaparece.

El limitar el pago de los daños sufridos a su simple reparación, en algunos casos significaría aceptar que el responsable se enriqueciera a costa de su víctima. Lo anterior en tanto las conductas negligentes, en muchas situaciones, pretenden evitar los costos de cumplir con los deberes que exigen tanto la ley, como los deberes generales de conducta.

Por otro lado, dichos daños tienen el objeto de prevenir hechos similares en el futuro. Se trata de imponer incentivos negativos para que se actúe con la diligencia debida, sobretodo en tratándose de empresas que tienen como deberes el proteger la vida e integridad física de sus clientes. A través de dichas sanciones ejemplares se procura una cultura de responsabilidad, en la que el desatender los deberes legales de cuidado tiene un costo o consecuencia real.

Por otro lado, una indemnización insuficiente, provoca que las víctimas sientan que sus anhelos de justicia son ignorados o burlados por la autoridad, por lo que, se le acrecienta el daño (no reparado) y se acaba revictimizando a la víctima, violándose de esta forma el derecho a una “justa indemnización”.

De lo anterior, se colige que a través de la condena del pago de daños punitivos, se sanciona la conducta ilícita de la persona que causó el daño moral a la víctima, acorde lo dispuesto por el invocado artículo 1916 del Código Civil Federal, al establecer “...Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo

tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual”; siendo que por una parte en el caso que nos ocupa, no quedó acreditado que la demandada hubiera incurrido en una conducta de esa naturaleza, al no haber aportado la actora probanza alguna que pusiera en evidencia la existencia de algún daño moral en la salud física y mental de la accionante, al exponer su vida íntima en los términos que precisó.

Aunado a lo anterior, cabe precisar que el hecho relativo a que la aseguradora, previo a la demanda, rechazó el pago de la indemnización solicitada, ello no implica intrínsecamente que tal negativa constituya un hecho ilícito, dado que la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en sus artículos 70, 71, 77, 78, 79 y 80, establece el derecho de las aseguradoras de analizar el fundamento de las reclamaciones relativas, para determinar su procedencia, o en su defecto el rechazo del pago de los siniestros suscitados al amparo de las pólizas de que se traten. Además, con la condena que en la parte conducente del presente fallo se emitirá, se estima que la hoy actora quedará debidamente indemnizada por la actualización del siniestro que reclama.

Sin que la accionante, en términos del artículo 1194 del Código de Comercio, hubiese ofrecido diverso medio de prueba para acreditar el daño moral y punitivo reclamado, por lo que deviene fundada la excepción en estudio.

Y finalmente, la demandada opuso todas las excepciones o defensas que se derivaran de la contestación, aunque no se hubieran expresado o se hubieren nombrado equivocadamente, en términos del artículo 46 del Código Local de Procedimientos Civiles.

Pues bien, en inicio se aclara que el precepto legal que invoca la demandada, no resulta aplicable supletoriamente al Código de Comercio, virtud que en su artículo 1077 regula en relación a las excepciones innominadas, al establecer *“Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido.”*; y a su vez, en su diverso artículo 1327, prevé que *“La sentencia*

se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación.”

Conforme a dichos preceptos legales, es obligación del juez al emitir el fallo definitivo, analizar la contestación de demanda y si entre los hechos de la misma se encuentran excepciones que la demandada no denominó en forma expresa, el juzgador tiene la obligación de analizarlas, tratándose de las excepciones procesales o de las relativas a los elementos de la acción; sin embargo, del escrito de contestación de demanda, no se desprenden excepciones diversas a las ya analizadas en la presente sentencia.

En consecuencia, se declara por una parte, que la actora ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■, acreditó los extremos de la acción de cumplimiento forzoso de contrato de seguro, que en la Vía Oral Mercantil ejercitó en contra de ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■, a quien les resultó fundada una de las excepciones opuestas:

En tal virtud, se condena a la demandada a pagar a favor de la actora, la cantidad ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, correspondiente a la cobertura “Infarto y Cáncer en Mujeres”, amparada por la Póliza de Seguro de Vida Individual número 404646823 base de la acción, pago que deberá efectuar en pesos moneda nacional conforme al valor que para las Unidades de Inversión sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se efectúe el pago.

Cantidad que resulta de dividir el importe de ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, entre ■■■■■■■■■■ valor de la UDI (unidades de inversión) publicada en el Diario Oficial de la Federación al día ■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■, fecha en la que venció el plazo para el pago del importe derivado del contrato de seguro, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley Sobre Contrato de Seguro.

Asimismo, se condena a la demandada a pagar a favor de la actora, los intereses moratorios generados por concepto de la

constituyendo así las costas judiciales, los gastos necesarios que eroga cada una de las partes para iniciar, tramitar y concluir un juicio.

Estableciendo respecto a su condena en los juicios mercantiles el artículo 1084 del Código de Comercio, que:

“La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del juez se haya procedido con temeridad o mala fe.

Siempre serán condenados:

- I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados;*
- II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;*
- III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;*
- IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutive, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias;*
- V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes”.*

Pues bien, analizadas las actuaciones judiciales que integran el presente juicio, conllevan a determinar en inicio, que en el caso no se actualizó ninguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del ordinal antes transcrito, toda vez que ambas partes ofrecieron pruebas, la actora para acreditar su acción y la institución de seguros demandada para justificar sus excepciones; no se comprobó en el sumario que alguno de los contendientes hubiera presentado instrumentos o documentos falsos; se tramitó el juicio oral mercantil y no el ejecutivo; no estamos ante la presencia del dictado de dos sentencias conformes de toda conformidad; y por último, aun cuando a la demandada le resultó fundada una de las excepciones opuestas, y se declararon improcedentes las prestaciones reclamadas por daños moral y punitivo, la actora sí demostró la procedencia de la acción de cumplimiento forzoso de contrato de seguro, condenándose a la

aseguradora demandada al pago de la indemnización reclamada como suerte principal, así como al pago de intereses moratorios.

En lo que hace por otro lado, a la conducta temeraria o de mala fe por las partes, lo cual se encuentra sancionado en el primer párrafo del precepto legal transcrito con antelación, la que se pone de manifiesto no solo ante la ausencia de pruebas respecto a los hechos en que se funda la demanda o la contestación, sino en actuar con pleno conocimiento de que su pretensión resultaba improcedente, o ausente de causa justificada, o bien, solo la instó con el propósito de demorar el trámite y resolución del proceso; que en el caso que nos ocupa no se encuentra evidenciado que la actora y la institución de seguros demandada, así se hubiese conducido.

En tal virtud, se concluye que cada parte deberá solventar los gastos y costas que hayan erogado con motivo de la tramitación del presente juicio.

Sin embargo, en lo que hace a la demanda entablada en contra de **■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■**, por actualizarse el supuesto establecido en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, virtud que resultó fundada la excepción de falta de legitimación en la causa opuesta por dicha institución crediticia, se condena a la actora a pagar a su favor, los gastos y costas que por el trámite del presente juicio hubiere erogado, previa su regulación incidental, en términos de los artículos 1082 y 1390 Bis 8 del Código de Comercio.

Lo anterior con apoyo en lo conducente, en la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de dos mil trece, Tomo 1, a página 574, que a la letra dice:

“COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL TÉRMINO “IMPROCEDENTES” A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 43/2007, de rubro: “COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).”,

sostuvo que acorde con la fracción V del citado artículo 1084, para que proceda condenar al promovente al pago de costas, basta que las acciones, las excepciones, las defensas, los recursos o incidentes que haga valer resulten improcedentes, y que se consideran así las acciones ejercitadas que no encuadran en los supuestos amparados en la ley o aquellas cuyos presupuestos, elementos o hechos constitutivos no se acreditaron durante el juicio. Sin embargo, en alcance a dicha tesis y de una nueva reflexión se precisa que el término "improcedentes" a que se refiere el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, debe entenderse como la ausencia de alguno de los elementos previstos en las propias normas para que pueda realizarse el estudio de fondo de la cuestión planteada, los cuales varían dependiendo de la vía que se ejerza y consisten en los mínimos necesarios que deben satisfacerse para realizar la jurisdicción; esto es, que el caso en su integridad, tanto en su parte subjetiva como objetiva, apegado a la seguridad jurídica y debido proceso, debe reunir los requisitos normativos para que el juzgador pueda conocerlo y resolverlo. Así, la procedencia de una acción, excepción, defensa, incidente o recurso, implica que se reúnan los requisitos mínimos necesarios para que sea posible su estudio en cuanto a la cuestión planteada, así como su resolución y efectos; sin que lo anterior contemple cuestiones de fondo que no hayan sido acreditadas, porque éstas desembocan en su calificación de infundadas, lo que significa que ya se han superado los temas de procedencia y un análisis de la cuestión de fondo."

Igualmente sirve de apoyo a la anterior determinación, la diversa tesis de jurisprudencia también emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV de junio de dos mil siete, que es del tenor siguiente:

"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Del primer párrafo del artículo 1084 del Código de Comercio se advierte que el legislador previó la condena en costas respecto de dos hipótesis: a) cuando así lo prevenga la ley; y b) cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe; estableciendo la obligación del juzgador de condenar al pago de las costas en los supuestos descritos en las fracciones del citado precepto legal, los cuales han de tenerse como casos concretos en cuya actualización, conforme a la primera hipótesis referida, la ley prevé la condena respectiva. Así, acorde con la fracción V del citado artículo, se concluye que para que proceda condenar al promovente al pago de costas, basta que las acciones, las excepciones, las defensas, los recursos o incidentes que haga valer resulten improcedentes, al margen de que la improcedencia sea notoria o resulte del estudio de la demanda y de la ponderación de los elementos aportados al juicio, toda vez que para los efectos de dicho precepto legal

no se requiere la concurrencia del elemento notoriedad, en tanto que se consideran improcedentes las acciones ejercitadas que no encuadran en los supuestos amparados en la ley o aquellas cuyos presupuestos, elementos o hechos constitutivos no se acreditaron durante el juicio”.

IX.- Con fundamento en el artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, una vez declarada ejecutoriada la presente sentencia, requiérase a la institución de seguros demandada para que dentro del término de setenta y dos horas, siguientes al requerimiento, compruebe haber pagado las prestaciones a que fue condenada y en caso de ser omisa al respecto, se ordenará al intermediario del mercado de valores o a la institución depositaria de los valores de la demandada, efectúe el remate de dichos valores, o, tratándose de instituciones para el depósito de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, transfiera los valores a un intermediario del mercado de valores para que éste efectúe dicho remate.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1321, 1322, 1324, 1327, 1328 y 1330 del Código de Comercio, la suscrita Juez resuelve el presente juicio bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Esta Juzgadora ha sido competente para conocer y resolver el presente juicio, así como la vía elegida por la actora para el trámite, fue la correcta.

SEGUNDO.- Se declara la falta de legitimación pasiva de ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■.

TERCERO.- Se declara que la actora ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, acreditó los extremos de la acción de cumplimiento forzoso de contrato de seguro, que en la Vía Oral Mercantil ejercitó en contra de ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, a quien le resultó fundada una de las excepciones opuestas.

CUARTO.- Se condena a la demandada a pagar a favor de la actora, la cantidad ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■

■■■■■■■■■■■, correspondiente a la cobertura “Infarto y Cáncer en Mujeres”, amparada por la Póliza de Seguro de Vida Individual número ■■■■■■■■■■ base de la acción, pago que deberá efectuar en pesos moneda nacional conforme al valor que para las Unidades de Inversión sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, para la fecha en que se efectúe el pago.

QUINTO.- Se condena a la demandada a pagar a favor de la actora, los intereses moratorios generados por el citado importe, a partir del día **■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■**; más los que se sigan causando hasta la solución del adeudo, en los términos establecidos en el considerando “VII” del presente fallo, previa su liquidación en la vía incidental.

SEXTO.- Se compensan las costas causadas en el presente juicio entre la actora **■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■**, y la demandada **■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■**, debiendo cada parte soportar las que hubiesen generado.

SÉPTIMO.- Se condena a la actora a pagar a favor de ■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, los gastos y costas que erogó con motivo de la tramitación del presente juicio, previa su regulación incidental.

OCTAVO.- Una vez que la presente se declare ejecutoriada, requiérase a la institución de seguros demandada ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■, para que dentro del término de setenta y dos horas, siguientes al requerimiento, compruebe haber pagado a la actora ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ las prestaciones a que fue condenada, y en caso de ser omisa al respecto, se ordenará la ejecución del presente fallo, de conformidad con el considerando respectivo del mismo.

**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA
LA LICENCIADA SILVIA JANETT DUARTE MALDONADO, JUEZA
PRIMERO ORAL MERCANTIL CON SEDE EN HERMOSILLO,
SONORA, ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA
ROSA TERESITA AGUILAR GARCÍA, QUIEN DA FE.- DOY FE.-**

